

# Venezuela. Un futuro incierto

Heinz R. Sonntag

---

**Heinz R. Sonntag:** Sociólogo venezolano-alemán. Doctor en Ciencias Sociales (Universidad de Bochum/RFA). Profesor de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Director del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES). Autor de numerosas publicaciones sobre problemas del desarrollo y del subdesarrollo.

---

Al examinar los síntomas de la situación venezolana y al compararlos con los de otras sociedades latinoamericanas, se descubren similitudes significativas: crecimiento cero o decrecimiento de la economía en los últimos siete años; una tasa de desempleo del 15 por ciento, según las estadísticas oficiales; una ingente deuda pública externa en el orden de casi 40 mil millones de dólares y una deuda privada con la banca internacional de unos 15 mil millones de dólares; un alza permanente de los precios que, pese a ser moderada, merma los ingresos de los sectores trabajadores y medios y disminuye aún más su poder adquisitivo; continua fuga de capitales y la subsiguiente falta de inversión interna; una crisis fiscal que le hace al Estado cada vez más difícil cumplir con los múltiples compromisos adquiridos sobre la marcha de casi 30 años de democracia representativa. Este síndrome, que podría ser ampliado con datos adicionales, deja entrever que se está viviendo una profunda crisis, entendida como un período prolongado de reacomodos y transformaciones del sistema social cuyo fin no es previsible y cuya salida aparece crecientemente incierta. Poco ha quedado del sueño y del proyecto de la "Gran Venezuela", impulsados en la década de los 70 a partir del espectacular aumento de la renta petrolera y aceptados, en menor o mayor medida, por la mayoría de los actores de la sociedad venezolana.

## **La crisis**

Los analistas de la Venezuela contemporánea, tanto en el país como fuera de él, la veían siempre como algo excepcional en el contexto latinoamericano. ¿No es la renta petrolera, pese a las oscilaciones de los precios del crudo hasta finales de 1973, un garante de la disponibilidad de recursos para impulsar el desarrollo económico y social? ¿No se había establecido, a partir de 1958, un pacto tácito entre las diversas fuerzas sociales que no sólo había permitido la sobrevivencia de la democracia, sino hasta la alternabilidad de dos grandes partidos en el gobierno, amén de la supuesta madurez de este régimen político? ¿No había acontecido un proceso acelerado de cambio social en todos los sentidos, modernizando la economía, la sociedad y el Estado? Todo parecía indicar que el país había dejado atrás una buena parte de los problemas que les son inherentes a las sociedades subdesarrolladas, tanto en el plano económico como en lo que reflejan los indicadores sociales, políticos y cultural-ideológicos y que su futuro "desarrollo"

estaba poco menos que garantizado. Los que dudaban de esta visión y de los hechos que aparentemente la fundamentaban fueron calificados de pesimistas y de "profetas del desastre" (por ejemplo por el ex presidente de la República Luis Herrera Campíns durante su período de gobierno, 1979 a 1984).

De hecho, la crisis que hoy vivimos pudo ser prevista (y fue prevista) a base de algunas tendencias que operaron desde finales de la década de los 60. Por ejemplo, la tasa de crecimiento interanual fue reduciéndose, a lo largo del último decenio y medio, en un 0.2 por ciento, no obstante el **boom** petrolero de 1974 y 1979/80. La productividad, particularmente en el sector manufacturero, fue estancándose paulatinamente. El proceso de sustitución de importaciones, sobre el cual descansaba el modelo de desarrollo puesto en marcha en los años 40 y fuertemente impulsado por el Estado a raíz del establecimiento de la democracia en 1958, fue agotándose, lo cual se evidencia por el hecho de que, a partir de 1970, las importaciones han crecido más rápidamente que el producto. Agréguese a estos datos otros de carácter económico y social: el desempleo nunca bajó, ni en tiempos de "pleno empleo", del 5 por ciento; el sector informal de la economía fue creciendo en forma permanente; la distribución del ingreso se desarrolló hacia una mayor desigualdad, de modo que el Censo de 1981 revela que casi el 75 por ciento de la población económicamente activa vive con ingresos menores de 4.000 bolívares y más del 50 por ciento con menos de 2.000 bolívares, sumas que rayaban para esa época en el mínimo de existencia; consiguientemente, el patrón de consumo tendía a una distorsión creciente; las tasas de analfabetismo y salubridad indicaban a comienzos de la década de los 80 un deterioro real.

En otras palabras, la actual coyuntura crítica es el resultado de un proceso prolongado en el que el modelo de desarrollo fue agotándose. La brusca caída de los precios del petróleo en el mercado mundial a comienzos de 1986 acelera este proceso y hace sus consecuencias económicas y sociales aún más graves.

### ***La "reactivación"***

Frente a una crisis cuyo carácter estructural fue visible desde finales del período de gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974 a 1979), la respuesta del Estado en el período siguiente y en el actual de Jaime Lusinchi ha sido la reactivación. Incluso sectores especialmente clarividentes del actual partido de gobierno hablaban hasta hace poco de esta posibilidad, si bien su diagnóstico mostraba a las claras el agotamiento del modelo de desarrollo, esto es: el carácter estructural de la crisis, como bien lo señala el VII Plan de la Nación presentado por la actual administración a comienzos de 1985.

Las políticas económicas destinadas a la reactivación apuntan obviamente a mantener en marcha la industrialización sustitutiva de importaciones, eje y casi sinónimo de ese modelo. Hacia ella van los recursos que el Estado dispone, a través de créditos y otros mecanismos, al sector privado y también aquéllos que invierte en su propio aparato productivo. Adicionalmente, bajo el gobierno actual,

se intentó "restablecer la confianza", quiere decir: estimular la inversión privada, mediante la puesta en marcha de un nuevo "pacto social", la cara política de la reactivación.

La innovación en el presente período constitucional ha sido, en términos de política económica, el fuerte estímulo a la agricultura. En efecto, el único sector económico con un crecimiento significativo en el año 1985 ha sido el agrícola. Pero ello ha generado algunos efectos perversos. Si bien es cierto que el país se auto abastece en ciertos renglones de la producción agrícola, no es menos cierto que se han evidenciado fallas graves de la infraestructura, difícilmente reparables en el corto plazo en vista de la crisis fiscal, y que no se han cumplido las aspiraciones de exportación, relacionadas con esta política.

Por lo demás, el gobierno del presidente Lusinchi ha priorizado la cuestión de la deuda externa, prácticamente desde el primer día de su mandato, por encima de cualquier reestructuración de la economía, para no hablar del diseño y la puesta en práctica de un nuevo modelo de desarrollo. Ha negociado y firmado un refinanciamiento de una buena parte de la deuda pública externa. La argumentación oficial para proceder así ha destacado que Venezuela, como país exportador de petróleo, necesita la confianza de los países acreedores, esto es: los altamente industrializados. Sin embargo, el contrato de refinanciamiento se firmó en un momento (febrero de 1986), en el cual ya era previsible que los ingresos petroleros iban a estar considerablemente por debajo de las estimaciones que sirvieron de base para los términos del mismo. En los actuales momentos, la banca internacional está presionando al país para que cumpla por lo menos una buena parte de las condiciones, evidentemente en un intento de dejar sentada su posición firme de bilateralismo ante los restantes países deudores de América Latina y del Tercer Mundo. El dilema está en que el cumplimiento agrava la crisis fiscal y hace más problemática aún la disponibilidad de recursos para la reactivación.

### ***La cuestión petrolera***

Si algo ha mostrado la caída de los precios del petróleo a finales del año 1985 es la vanidad de las ilusiones de que se iban a mantener relativamente estables gracias al poder de la OPEP y la coincidencia de intereses entre sus miembros y las compañías transnacionales. Esta ilusión estuvo presente en la planificación prospectiva tanto de los gobiernos de los países exportadores como de las grandes petroleras. En las actuales circunstancias se hacen imposibles previsiones seguras, la incertidumbre se ha convertido en la única constante de los procesos de planificación en cuanto a la magnitud de los recursos fiscales disponibles en países que, como Venezuela, dependen para sus ingresos de la renta petrolera.

La respuesta del gobierno ha tenido varias facetas. Por un lado, ha autorizado al **holding** petrolero estatal a manejarse en forma relativamente libre en el mercado mundial. El resultado consistió en oscilaciones en el volumen de exportación y en los precios, las cuales han impedido hasta la fecha que las consecuencias fueran

aún más perniciosas. Por otro lado, el **holding** ha profundizado la política de internacionalización, iniciada con el convenio entre la VEBA de Alemania Occidental en el período constitucional pasado. Se trata de "joint ventures", esto es: la adquisición por Petróleos de Venezuela, C.A. de una parte de las acciones de refinerías en países industrializados y la cooperación en el manejo de las mismas con la compañía propietaria de la otra parte, de manera que las empresas filiales del **holding** tengan asegurado un mercado. Es prematuro evaluar los resultados de esta política, si bien el convenio con la VEBA le ha garantizado al país un volumen fijo de exportación a precios relativamente estables. No obstante ello, algunos sectores nacionalistas y de izquierda ven en ella el peligro de que las transnacionales adquieran otra vez mucha influencia sobre el negocio petrolero del país, en detrimento del cumplimiento de los objetivos que subyacían a la nacionalización del petróleo en 1976.

### **Los problemas sociales**

Las tendencias que han llevado a la economía a una crisis estructural, agravadas por la baja de los precios del petróleo en la actual coyuntura, han agudizado algunos problemas sociales en cuya superación o al menos amortiguación creían muchos actores de la sociedad venezolana. Se ha aumentado vertiginosamente la "pobreza crítica", de modo que casi un tercio de la población vive bajo sus condiciones. Según otras estadísticas oficiales, el 82 por ciento de los hogares no dispone de los recursos para llenar la cesta de alimentación. En las grandes ciudades, alrededor del 50 por ciento de los habitantes viven en zonas marginales. Ya mencionamos antes el grave deterioro del poder adquisitivo de los sueldos y salarios de los trabajadores y medios. Finalmente, la crisis fiscal del Estado impide que éste se haga cargo de erogaciones para mitigar los efectos señalados, salvo que se produjera una reorientación radical y global del presupuesto, lo cual parece poco probable en vista de la configuración de las fuerzas hegemónicas en la sociedad y el Estado.

Una vez más se debe constatar que Venezuela se está acercando a las situaciones que se viven en otros países latinoamericanos desde hace más tiempo. Lo sorprendente en este caso es que el nivel de conflictividad social sigue siendo relativamente bajo. No han estallado protestas masivas, como ocurrió en los casos de Brasil, República Dominicana, Bolivia y muchos otros. Se han producido muchas huelgas. Tampoco parece haber acontecido una radicalización político-ideológica de amplios sectores. La explicación de la "calma" está en el hecho de que la sociedad civil continúa siendo débil, que en la percepción de los ciudadanos existe aún una confianza grande en la capacidad del Estado de manejar la situación y que los grandes partidos del **establishment** han mantenido su control sobre las organizaciones de masas, especialmente los sindicatos y las ligas campesinas, así como los gremios profesionales de la clase media. Un elemento explicativo adicional ha sido la afirmación reiterada del gobierno que no sigue las imposiciones del FMI, pese a que muchas medidas políticas y de política económica parecen idénticas a las que han venido adoptando bajo presión los

gobiernos de otros países de la región. Semejante afirmación propagandística ha dejado huellas en la sociedad y ha retroalimentado la situación de tranquilidad relativa.

### ***El cuadro político***

Como se sabe, no solamente el presidente Lusinchi fue electo con más del 56 por ciento de los votos, sino que también su partido Acción Democrática (AD) obtuvo la mayoría absoluta (en un sistema político en el que la abstención electoral es tradicionalmente baja). Estos hechos le daban a la gestión gubernamental una base de legitimación mucho más amplia que la que había tenido cualquier gobierno democrático desde 1958 en adelante.

Hoy día, la popularidad del presidente se mantiene elevada. Incluso la de su gabinete y la de su partido no han experimentado una merma en las proporciones que se podrían esperar, dada la crisis y en vista de que las políticas instrumentadas objetivamente no han satisfecho las promesas que AD y el candidato Lusinchi habían hecho en la campaña de 1983.

Ello no significa que el partido de gobierno esté exento de contradicciones. De hecho, éstas se manifestaron claramente en el último proceso de elección de las autoridades y están presentes en la actualidad, a pesar del aparente control que la fracción del presidente y su aliado, el buró sindical, habían logrado. No asumen siempre la forma de contraposiciones ideológicas, aunque hay; sectores partidistas cuyo proyecto socioeconómico y político se circunscribe más decididamente al de "socialismo democrático" o la socialdemocracia latinoamericana. Da la impresión que las luchas en el partido tienen por objeto forjar el instrumento para las elecciones de 1988, y eventualmente, para el período constitucional que poco después se iniciara.

Los partidos de oposición se batan igualmente en un mar de contradicciones, muchas veces cristalizadas en personalismos. El partido socialcristiano COPEI vive una crisis de identidad, después del descalabro en las elecciones de 1983 y el gobierno altamente criticado de Herrera Campíns. Se ha propuesto la realización de un congreso ideológico, durante el cual tendrá que decidirse en qué dirección irá el proyecto que propondrá a la sociedad, esto es: si va a seguir el acercamiento a posiciones de AD o si radicaliza, hacia la "derecha" o hacia la "izquierda" su posición ideológica.

La izquierda no social demócrata no presenta, por los momentos, ninguna alternativa, ni en el plano político-ideológico ni en el electoral.

En Venezuela ocurre lo que se puede observar también en otros países de América Latina: **todos** los partidos políticos miran, con una suerte de fascinación morbosa, el presente y no presentan ningún proyecto hacia el futuro. El inmediatez se ha impuesto sobre cualquier intento de diseñar políticas cuyo horizonte de tiempo

sobrepase los próximos dos años. La única excepción es, en nuestro caso, la tentativa de reformar el Estado. La Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) acaba de presentar la propuesta de una modernización del sistema político y hará dentro de poco lo mismo en cuanto a la administración centralizada y descentralizada. El proyecto que en tales propuestas se manifiesta es, sin embargo, un conjunto de remedios para males heredados del pasado y no un bosquejo de soluciones para los problemas del presente y los que se avecinan con creciente velocidad. Aun así, es bastante dudoso que AD y COPEI acepten el conjunto de reformas, sobre todo las políticas, porque hacerlo implicaría una transformación sustancial de su propia forma de hacer política.

### ***Una mirada hacia adelante***

El análisis de la coyuntura (y de las tendencias que la han conformado), por más somero que ha sido, permite concluir que la crisis económica continuará operando y probablemente profundizándose. Es más, en la medida en que no surja un proyecto para el futuro, existe el peligro que las transformaciones actualmente en marcha en el sistema mundial involucren al país aún más y determinen su rumbo. Este peligro aumenta en la medida en que las distintas fuerzas sociales y los partidos políticos insistan en la posibilidad de "reactivar" el modelo de desarrollo, tanto en lo económico como en lo sociopolítico y cultural-ideológico.

El reto de la sociedad venezolana consiste hoy día en la superación de la apatía de los ciudadanos, particularmente de la juventud. Para ello será necesario diseñar y poner en marcha nuevas formas de participación en la vida societal y en la toma de las decisiones que conciernen a todos. Los movimientos sociales que se han venido formando al calor de la actual coyuntura apuntan en esta dirección, pero son todavía demasiado débiles en su actuación, en el fondo de sus planteamientos y en la forma de articularlos.

Alguien ha dicho que la crisis actual implica también una gran oportunidad para el país. Es cierto. Pero no olvidemos que oportunidades no se cosechan, sino que se crean.